

Recurso de nulidad penal Rol I. C. 367-2023.

C/Francisco Leandro Salazar Díaz y Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán

Talca, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

**Visto:**

En autos R.I.T. 91-2022, R.U.C. 2100268613-6, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, por sentencia definitiva de seis de marzo de dos mil veintitrés, condenó, en lo que dice relación con este Recurso, a Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán, a sufrir la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de diez unidades tributarias mensuales, más accesorias legales, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas, descrito y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000. Asimismo, fue condenado a sufrir la pena de cinco años y seis meses de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, como autor de los delitos consumados de porte ilegal de arma de fuego y municiones y tenencia de arma de fuego artesanal o hechiza, todos cometidos el 7 de abril de 2.021 en la comuna de Longaví. Las penas deberán cumplidas de manera efectiva, con los abonos que el fallo reconoció en su favor.

En contra de ese fallo, la Defensa del sentenciado Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán dedujo recurso de nulidad basado en la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal; y, de manera subsidiaria, por el motivo señalado en la letra b) del artículo 373 del mismo cuerpo legal.

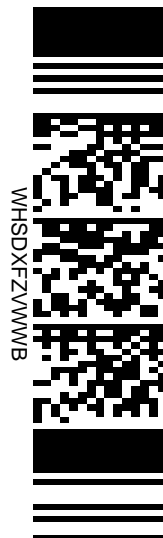
Se procedió a la vista de la causa, oportunidad en que se escucharon los alegatos del recurrente y del Ministerio Público, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de este fallo.

El coimputado y acusado Francisco Leandro Salazar Díaz no recurrió en contra de esa sentencia.

**Considerando:**

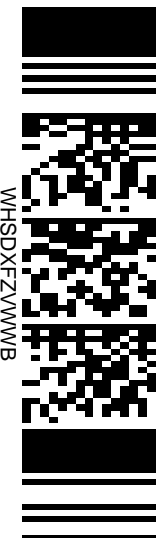
**Primero:** Que la Defensa de Guzmán Guzmán dedujo recurso de nulidad contra la sentencia, invocando como **causa de nulidad, la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal**; esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

Luego de referirse a las exigencias de la sentencia que imponen los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, los que reproduce literalmente, así como el considerando 9º, indica que la infracción está



relacionada con el principio de la razón suficiente, que desarrolla latamente, y por el que se debe investigar el apoyo o fundamento material de lo enunciado, lo que equivale a indagar en la prueba material vertida en el proceso. El tribunal deberá emitir un razonamiento fundado en conclusiones adecuadamente deducidas de la prueba sometida a su conocimiento y valoración, por lo que toda decisión del órgano jurisdiccional debe contener argumentos que la justifiquen para ser entendida y aceptada por los intervinientes.

Señala que falta corroboración de la conducta típica consignada en el artículo 3 de la ley 20.000. Para dar por acreditado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de su representado, infringió los principios de la lógica, vulnerando el límite de valoración de la prueba establecido en la ley en el sistema de sana crítica. La falta de corroboración de la conducta típica, con otros elementos externos, respecto de la existencia del delito de tráfico de estupefacientes, y la participación que le cabría a su representado en el ilícito. Cita el considerando décimo, que se refiere a la participación de Guzmán Guzmán en el tráfico de droga en su domicilio y que en el de Francisco Leandro Salazar Díaz se realizaba el acopio de droga, se ha tuvo en consideración el testimonio de los funcionarios a cargo de la investigación, los que transcribe innecesariamente, reclamando por qué los sentenciadores llegaron a establecer la efectividad de la hipótesis de acopio en el domicilio del co acusado. Esa pregunta, en base a la prueba rendida, no se puede responder mediante el razonamiento establecido por el tribunal en su sentencia. Se pregunta por qué los sentenciadores le dieron valor probatorio a la declaración de un coimputado que no fue ratificada por otro medio de prueba externo a la fuente directa. Las declaraciones de los funcionarios policiales son contestes en indicar que se manejó una hipótesis de acopio de droga por parte de Guzmán Guzmán, en la casa de Francisco Díaz, pero a la vez son contestes en indicar que esa hipótesis en virtud de las diligencias investigativas no pudo ser ratificada. ¿Por qué se vinculó a Guzmán Guzmán con la droga incautada del domicilio de Francisco Díaz?. Esa conclusión solo puede emanar por la información aportada por Francisco Díaz, no rindiéndose ningún otro medio de prueba que pueda concluir en esa dirección. El hecho de que en la mochila se encontraron cartuchos de calibre 12 de similares características al encontrado en el domicilio de Guzmán Guzmán, que son aptas para el



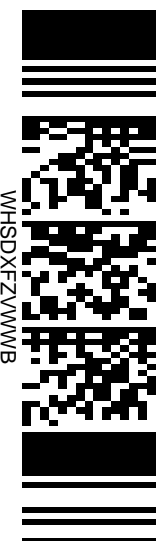
disparo y que son factibles de percutir por el arma artesanal incautada a éste son meras elucubraciones, sin ningún sustento en la prueba rendida.

Alega el recurrente que los elementos que justifican racionalmente la prueba son las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica. La sentencia incurrió en graves errores respecto de este último límite material a la libertad probatoria, toda vez que irrespetándolos arribó a una decisión condenatoria que no se encuentra justificada. Ninguno de los elementos probatorios entregó razones o elementos de juicio suficientes para condenar mi representado por el delito de tráfico, porque: 1. Que los funcionarios policiales son contestes que Guzmán Guzmán fue detenido por una orden de entrada y registro, en su domicilio. 2. Que en dicho domicilio fue incautada cannabis sativa en un equivalente de 180 gramos y tres plantas de la misma especie. 3. Que en dicho domicilio se encontraron elementos para la dosificación y veinte mil pesos. 4. Que de las vigilancias discretas solo en dos oportunidades se logró determinar intercambios de mano.

Sobre la infracción sustancial y perjuicio en su contra, la sentencia no cumplió con los requisitos establecidos por el legislador según la normativa recién reseñada, lo que implica que la sentencia debe ser redactada en términos tales que de su lectura se permita reproducir el razonamiento seguido por el juzgador, permitiendo llegar a la misma conclusión que se consignó, a fin de evitar arbitrariedad, procurando hacer un real contraste entre la prueba rendida y las conclusiones a las que arriba el tribunal sentenciador.

La sentencia dio por establecidas las circunstancias fácticas señalando los medios de prueba con las cuales la tienen por acreditada, pero sin efectuar la debida valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297, llegando a una conclusión que no responde a la información introducida en el juicio oral, que de haberse respetado al principio de corroboración y de razón suficiente, se debía haber absuelto a mi defendido.

El recurrente solicita concretamente que se declare la nulidad del juicio y de la sentencia recurrida en virtud de la causal contemplada en el artículo 374 letra E) del Código Procesal Penal, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento y ordenando de esta forma la realización de un nuevo juicio oral ante Tribunal no inhabilitados.

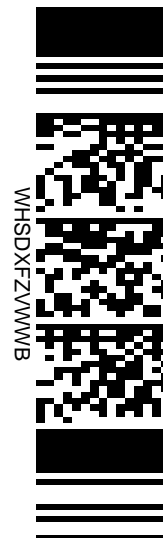


**La Defensa invoca como segunda motivación de invalidación, en forma subsidiaria a la primera, la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal,** los que copia fielmente. El fallo vulneró el verdadero sentido y alcance de los artículos 3 y 4 de la Ley 20.000, error que sirvió de fundamento para calificar los hechos como tráfico de drogas ilícito previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la ley 20.000.

En cuanto a los antecedentes de hecho y de derecho en que fundó el recurso, indica que las normas aplicadas erróneamente son los siguientes:

- Artículo 3° de la Ley N° 20.000, que transcribe.
- Artículo 4° de la Ley N° 20.000 que copia.

Los elementos del tipo penal objetivo del artículo 4° de la Ley N° 20.000 son los siguientes: A) el sujeto activo debe realizar una acción que infrinja la norma en los términos del artículo 3° de la ley 20.000, en este caso, poseer, transportar, guardar o portar consigo pequeñas cantidades de drogas; B) el objeto material del delito es la droga, esto es, sustancias estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. C) la acción del sujeto activo debe crear un riesgo penalmente relevante o no permitido; D) dicho riesgo debe concretarse en un resultado que constituye una lesión para el bien jurídico protegido por el delito, cual es la salud pública, y que se traduzca en un resultado material; y, E) que lo anterior sea objetivamente imputable a la conducta desplegada por el agente. Asimismo, el tipo penal de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, exige en sus verbos rectores la acción de poseer, transportar, guardar o portar consigo pequeñas cantidades de drogas. En general, como ocurre con las modalidades de tráfico, el articulado de la Ley 20.000 revela la manifiesta intención de prohibir y, en su caso, castigar, los intentos de trascendencia de la vinculación que cualquiera tenga con psicotrópicos. En otras palabras, para el derecho sancionatorio relativo a drogas, la alteridad es un baluarte insustituible. Se pune en la medida que ello alcanza o afecta a otro. Es por eso que el artículo 3 de la preceptiva en análisis consigna que las penas que establece el artículo 1° se aplican, también, a quienes "trafiquen" con tales sustancias y a los que, por cualquier medio "induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias." En suma, siempre el legislador está avizorando el resultado perverso del que incurre en la mala y delictiva práctica de comercializar



droga para un uso o consumo no legitimados terapéuticamente. La sentencia afirma que su representado Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán, fue autor del delito consumado de tráfico drogas, según los hechos que el Tribunal tuvo por acreditados y que reproduce en su integridad.

La errónea aplicación del derecho radica en que los hechos establecidos no permiten concluir jurídicamente que su representado realizó una acción que infrinja una prohibición normativa en los términos del artículo 3° de la ley 20.000. Primero: que la droga incautada en el domicilio de Francisco Díaz, no es de Guzmán Guzmán. Segundo: que, la declaración de los funcionarios policiales, concluyeron que no pueden acreditar la hipótesis de acopio que vincule a Guzmán Guzmán con Francisco Díaz. Tercero: que en el domicilio de Guzmán Guzmán encuentran 180 gramos de cannabis sativa y 3 plantas de la misma especie en crecimiento. Cuarto: que le encuentran \$ 20.000.- La sentencia incurrió en errónea aplicación del derecho al calificar jurídicamente la conducta de su representado como constitutiva del delito de tráfico de drogas, en circunstancias que debía ser calificado como tráfico de pequeñas cantidades.

Indica la recurrente que la infracción sustancial y el perjuicio sufrido por la causal deducida en forma subsidiaria, -aplicación errónea del derecho- cuando de haberse aplicado correctamente la ley debió condenarse como autor del delito consignado en el artículo 4 de la ley 20.000.

Las peticiones concretas en relación con la causal subsidiaria, atendido lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, solicita invalidar solo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, a favor de Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán.

**Segundo:** Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “*Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)...*”

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: “*Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297*”. A su turno, el artículo 297 ya citado, consagra la libertad del



juzgador en la apreciación de la prueba, estableciendo como límites de ella, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Asimismo, establece la obligación de valorar la totalidad de la prueba, incluso de aquélla que hubiere desestimado.

**Tercero:** Que en lo relativo a la causal principal de nulidad sostenida por la Defensa de Guzmán Guzmán, alegó la infracción a la regla de la sana crítica, basado, principalmente, en que los elementos probatorios incorporados al proceso fueron insuficientes para la acreditación, más allá de toda duda razonable, sobre la existencia del sustrato fáctico que permitiera calificarlos en el tipo penal en que fueron subsumidos por los sentenciadores respecto del primer capítulo del reproche penal del Ministerio Público, esto es, el llamado “tráfico de drogas”.

**Cuarto:** Que si bien el ordenamiento jurídico no describe las reglas de la lógica, el sub principio de la razón suficiente, no obstante citarla, entre otras, como límites en el proceso dialéctico de valoración de los antecedentes probatorios, que consiste, al decir del autor Jorge Correa Selame, en su libro “La sana crítica”, Ediciones Jurídicas, 2017, página 71, en que “...*Todo tiene su razón de ser...La razón de ser suficiente de cualquier imperativo jurídico y de todo el derecho es la conducta humana, cuya regulación de acuerdo a cierto valor y fines es el objetivo del orden jurídico ...*” Cita al filósofo alemán Wilhem Leibniz quien lo describió como aquel que dice “*que “todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique” lo que es, es por alguna razón, “nada existe sin una causa o razón determinante... ”.*

Al tenor de esa conceptualización, los cuestionamientos que hace la Defensa respecto de los fundamentos que empleó el Tribunal para dar por acreditada la existencia del primer hecho penal por el que acusó el Ministerio Público, así como la participación atribuida al acusado Guzmán Guzmán, no guardan relación con el proceso de valoración de los elementos probatorios con los que se logró producir la convicción de condena por los sentenciadores, sea respecto del tipo, en especial, sobre la tenencia de drogas fuera del tipo establecido en el artículo 4 de la Ley 20.000, como de la falta que se señala en el artículo 50 de ese texto legal. El volumen de la droga que diferencia ambos tipos penales, refieren como verbo rector la “posesión” de droga, entendida como tenencia de la misma, con facultades suficientes para decidir sobre el destino de ella, de manera que la guarda por un tercero no obsta para ser el poseedor (en términos penales), de las

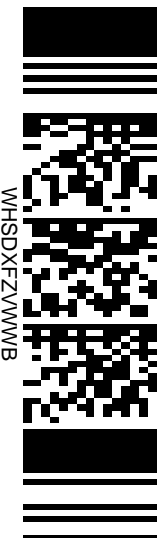


sustancias, circunstancias que los sentenciadores tuvieron por acreditadas no sólo por los dichos del coacusado, sino que también por la forma y lugar en que éste mantenía guardadas esas sustancias, así como la existencia de actividades propias de tráfico de la que Duero n cuenta los funcionarios policiales, de manera que hubo elementos suficientes y coherentes entre sí para construir la convicción de condena y superación de la duda razonable sobre la existencia del sustrato fáctico del proceso penal.

En el proceso heurístico y dialéctico llevado a cabo por el Tribunal de mérito no se percibe la infracción que se alegó en el Recurso, ya que los antecedentes probatorios acreditaron que los hechos ocurrieron en el lugar que se indicó, que los coacusados tuvieron participación en en los mismos, de manera suficientemente diversa que justificaron reproches penales de diversa entidad y que permitieron formular reproches a diversos títulos, elementos probatorios que se estimaron como suficientes para derribar la presunción de inocencia, tratándose de elementos de convicción suficientes al efecto. La controversia que levantó el recurrente sobre la fuerza de convicción de los medios probatorios no lograron introducir cuestionamientos que permitieran desacreditar el mérito de las declaraciones de los acusados, de los funcionarios policiales, de la prueba material y pericial, los que fueron suficientes y trascendentes para la resolución del conflicto penal y por ende, debe ser desoída la Defensa.

**Quinto:** Que en consecuencia, los sentenciadores de mérito pronunciaron un fallo condenatorio señalando los hechos que fueron acreditados en su parecer, así como el valor de los antecedentes que motivaron la decisión de condena del reo, sin que sea perceptible la presencia de los hechos con que la Defensa cuestiona el ilícito, en especial, de infracción al principio de la razón suficiente.

Sobre este último punto, cabe precisar que ante la consagración de la libertad de prueba que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal, los antecedentes probatorios deben ser ponderados en términos de la convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal, debidamente fundamentada en la prueba rendida en el juicio. Esa obligación aparece satisfecha por el ente jurisdiccional, sin que el reproche que planteó el recurrente sobre falta de corroboración de los dichos del segundo acusado, tenga fundamento en el desarrollo del razonamiento de éste.



Por lo anterior, el primer capítulo de invalidez levantado por la Defensa debe ser desestimado.

**Sexto:** Que la causal subsidiaria que alegó la Defensa de Guzmán Guzmán -la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal-, las reglas legales que se señalan en los artículos 3 y 4 de la Ley 20.000, que diferencia entre el tráfico de sustancias psicotrópicas por el volumen y naturaleza de ellas, fundado en la mayor o menor afectación de la salud pública, y por ende, con diferente penalidad, alegando que la droga fue recuperada del poder de Salazar Díaz y por ende, la sustancia hallada en poder de Guzmán Guzmán sólo tipifica el reproche que se fija en el artículo 4 de la Ley 20.000.

Cómo lo dejó establecido la sentencia en análisis en el motivo 9º, la droga si bien fue hallada en un domicilio diferente al del acusado Guzmán, era de propiedad de éste, sirviendo la casa de Salazar Díaz sólo de un lugar de acopio, hecho que es inmodificable para esta Corte por la naturaleza de la causal, por lo que el volumen de aquella, así como los demás elementos incautados de poder del recurrente, permiten dar por cumplidos los elementos propios del tipo penal por el que fue sancionado en esta causa.

El hecho del micro tráfico pretendido por la Defensa, y por el que busca sea finalmente condenado, no guarda relación con el volumen y naturaleza de las sustancias que poseía Guzmán Guzmán, sea de manera directa, sea encargando la misma, con las medidas de seguridad necesarias, a un tercero que no disponía de la administración y destino de la droga, la que estaba a cargo de aquel acusado.

Por lo anterior, la segunda causal subsidiaria de invalidación debe ser desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, ***se rechaza*** el recurso de nulidad deducido por la Defensa de Cristopher Deyvis Guzmán Guzmán, en contra de la sentencia definitiva de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa R.I.T. 91-2022, R.U.C. 2100268613-6 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, declarándose que ésta y el juicio oral no son nulos.

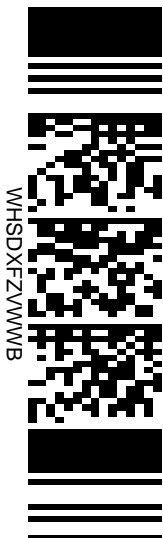
Redacción del ministro Carrillo González.

**Regístrese y devuélvase.**

**ROL I. C. 367-2023/PENAL.**







WHS DXFZVWMB

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Alexis Alberto Mondaca M. Talca, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

En Talca, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

